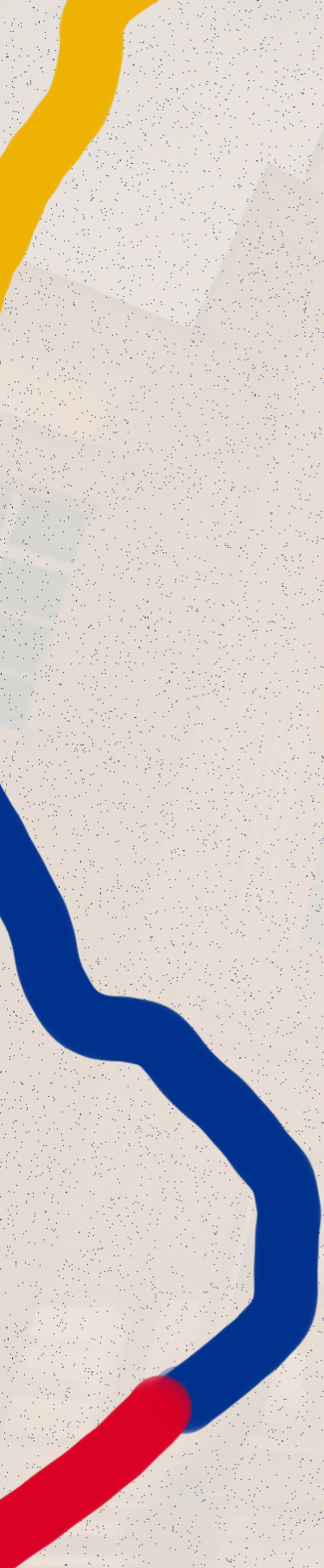




CONCLUSIONES: TRES CARRILES DE UNA TRANSICIÓN INCOMPLETA

El informe sobre los tres primeros años del gobierno de Gustavo Petro nos permitió identificar con nitidez los trazos de una transición democrática en disputa. Una transición que, más que lineal o concluyente, ha sido fragmentada, tensionada y en muchos sentidos asimétrica. A través del lente de los tres carriles —la coyuntura crítica, la realización programática y las estructuras persistentes— se dibuja un balance complejo: un gobierno con vocación transformadora enfrentado a un orden institucional diseñado para resistir el cambio.

Carril 1: Una coyuntura crítica que reverbera

Los primeros tres años del gobierno estuvieron marcados por una alta densidad de eventos, rupturas internas, escándalos y reacomodos en la coalición de gobierno. La agenda transformadora impulsada desde la Presidencia navegó en un mar de tensiones mediáticas, reveses legislativos y fracturas políticas que definieron el pulso gubernamental. Entre los hitos más relevantes se cuentan la aprobación de la reforma tributaria en 2022, el accidentado trámite de las reformas sociales (con avances como la pensional y retrocesos como la laboral y la de salud), y una constante rotación ministerial que deterioró la cohesión política del Ejecutivo. A ello se sumó el escándalo de la UNGRD, con efectos corrosivos sobre la legitimidad institucional, y un punto de inflexión crítico: el atentado contra el senador Miguel Uribe en plena coyuntura electoral de 2025, que reactivó los temores sobre seguridad política y alteró el clima democrático.

Esta coyuntura —ruidosa, inestable, polarizante— condicionó la capacidad del gobierno para implementar su programa y minó buena parte de su capital político. La narrativa del cambio quedó encapsulada en disputas reactivas, mientras la oposición encontró terreno fértil para capitalizar errores y desgastes.

Carril 2: La realización institucional y sus límites

La capacidad del gobierno para traducir su proyecto político en política pública efectiva ha sido desigual y profundamente determinada por cuatro factores: la calidad técnica de las promesas, el nivel de coordinación institucional y territorial, la gobernabilidad efectiva y la capacidad operativa del Estado.

Allí donde existió una base normativa clara, ventanas de oportunidad política y alineación entre actores, las iniciativas avanzaron: casos como la reforma tributaria o el fortalecimiento del PAE son ejemplos de ello. Pero en aquellas áreas donde primaron la fragmentación legislativa, la débil articulación entre entidades o la ausencia de músculo institucional —como en las promesas de protección a líderes sociales o de empleo garantizado— el cumplimiento fue fallido o simbólico.

Incluso las promesas formalmente cumplidas tropezaron en su implementación, revelando cuellos de botella estructurales: baja ejecución presupuestal, rigideces operativas, y un aparato estatal más preparado para administrar que para transformar. El informe deja claro que tener razón política no es suficiente si no se cuenta con fuerza institucional y pericia operativa.

Carril 3: Las estructuras que aún no se transforman

Más allá de los eventos coyunturales y de la gestión del programa de gobierno, el tercer carril permite una lectura más honda: la tensión irresuelta entre un proyecto político emergente y una arquitectura estatal que no fue diseñada para albergar rupturas ideológicas profundas.

El Estado colombiano —con sus dispositivos burocráticos, sus lógicas clientelares, su tradición centralista y sus inercias legales— no ha sido modificado sustantivamente en estos tres años. Sigue operando como un amortiguador del cambio más que como su facilitador. La transición iniciada con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 permanece inconclusa. La cohabitación entre un modelo de izquierda democrática y una institucionalidad moldeada por la guerra, el patrimonialismo y la desconfianza al disenso continúa generando bloqueos y contradicciones.



Además, el ejercicio de gobierno ha evidenciado que no basta con ocupar el poder: hay que hacerlo gobernable. La falta de presencia estatal en vastas zonas del país, la coexistencia con poderes criminales de facto y la débil articulación territorial impiden que las decisiones nacionales se traduzcan en transformaciones locales reales.

Por último, persiste un legado profundo de desigualdad estructural, corrupción endémica y violencia fragmentada que ningún cambio normativo ha logrado desmontar plenamente.

Una transición aún abierta

Este informe no solo evalúa lo logrado o lo incumplido. Ofrece una lectura sobre los límites estructurales de una transición democrática que no ha podido consolidarse. Los obstáculos enfrentados por el gobierno Petro no se reducen a errores de gestión ni a déficits de liderazgo. Reflejan, sobre todo, la magnitud del desafío que implica reconfigurar el poder político, redistribuir capacidades institucionales y disputar los sentidos de lo público en un país con fuertes mecanismos de reproducción de privilegios.

Colombia está transitando un momento fundacional, pero no definitivo. El éxito de esta transición no dependerá únicamente del destino del actual gobierno, sino de la capacidad de múltiples actores—instituciones, partidos, ciudadanía, movimientos sociales y élites—para sostener, ampliar y profundizar un nuevo orden democrático, capaz de transformar estructuras y no solo administrarlas.